

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA SUSTANCIADORA
ALBA LUCÍA GOYENECHE GHEVARA

Medellín, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés.

Radicación	05001 31 03 013 2022 00125 01
Proceso	Verbal – Responsabilidad médica
Demandante	Marina Uribe Caipa, en causa propia y en condición de curadora de su hijo A.J.E.U. Cristofero Echavarría Uribe Sandra Liliana Echavarría Uribe Rosa Elvira Echavarría Uribe Luz Marina Echavarría Uribe (todos en causa propia y en acción hereditaria por los perjuicios sufridos en vida por Pedro Nel Echavarría)
Demandado	Sociedad Médica Antioqueña – SOMA S.A.- EPS Suramericana S.A. Juan Camilo Álvarez Pava
Tema	Apelación contra auto que decreta pruebas
Decisión	Confirma
Rdo. interno	072-23
Providencia No.	151-23

I. ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto del 17 de enero de 2023 (archivo 29. Cuaderno 1. Primera instancia) proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín a través del cual se decretaron unas pruebas y se negaron otras.

Busca el actor que se revoque parcialmente la decisión de primera instancia, en lo concerniente a la negativa a decretar una prueba por informe que fuera solicitada oportunamente, consistente en oficiar a la empresa Tigo-Una para que indique a que abonado pertenece una línea telefónica, con lo cual busca demostrar la falsedad en la que incurrió el Dr. Juan Camilo Álvarez (demandado) en el numeral 12 de su contestación, puesto que el número telefónico anotado en la historia clínica de alta con fecha del 07 de diciembre de 2011, correspondía al número de la residencia del paciente y no del consultorio.

II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

1. Siendo admisible el trámite de la alzada, por expresa previsión del artículo 321, numeral 3o del Código General del Proceso, se procederá a decidir lo que en derecho corresponda.

2. Establece el artículo 167 del estatuto procesal citado que “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

A su vez el artículo 168 de la misma codificación, consagra que “El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

Por su parte el artículo 173 ejúsdem señala en relación con las oportunidades probatorias que “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código...El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.

3. Los anteriores preceptos normativos indican claramente que, en primer lugar, es deber de las partes probar los fundamentos fácticos que pueden edificar los efectos jurídicos perseguidos, y para ello deben hacer uso de los medios probatorios que resulten más pertinentes, conducentes y útiles al propósito buscado. Teniendo la posibilidad de aportar la prueba si la parte que la solicita o pretende hacer valer está en capacidad de conseguirla. De lo contrario podrá invocar su decreto y práctica.

4. En el caso que ocupa la atención del despacho, busca la parte actora demostrar la falsedad de la afirmación efectuada por el codemandado Juan Camilo Álvarez en el numeral 12 de su contestación, demostrando que el número telefónico indicado en la historia clínica de alta del 07 de diciembre de 2011, correspondía al número de la residencia del paciente y no del consultorio.

Para ello invoca como medio de convicción al juzgador el que la empresa telefónica Tigo-Una certifique a quien corresponde la línea telefónica mentada en precedencia. En aras de conseguir la prueba, el mismo actor señala que elevó derecho de petición a la citada sociedad, el que aún no ha sido respondido, por lo cual pretende que sea el juez de conocimiento quien a través del decreto de una prueba, conmine al tercero a dar respuesta a su solicitud.

Es evidente, que tal como lo indica el *iudex a quo*, la prueba resulta impertinente, más no inútil, pues es el propio demandante quien tiene la posibilidad de obtenerla, como ya lo ha gestionado, por lo cual no es dable hacer uso de una orden judicial para suplir su actividad como promotor en la obtención de la prueba. Está en cabeza suya el hacer los requerimientos y diligencias necesarias para recibir la información pretendida. Y solo en el evento en que resulte infructuoso su cometido, lo cual deberá demostrar en el proceso, tiene la posibilidad de acudir al juez de conocimiento para que se dé aplicación a la parte final del párrafo segundo del artículo 173 del C.G.P.

Finalmente no sobra enunciar que el artículo 275 ibídem prevé, en tratándose de la procedencia de la prueba por informe, que “Apetición de parte o de oficio el juez podrá solicitar informes a entidades públicas o privadas, o a sus representantes, o a cualquier persona sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe, salvo en los casos de reserva legal....”.

Para el propósito perseguido por el apelante, esta prueba no es la adecuada en la obtención de una información, que no requiere de la complejidad que implica un informe. Es por ello que negar tal clase de prueba resulta procedente, en la medida que para obtener la información y tener la certeza de a quien le fue asignada una línea telefónica, es el derecho de petición la vía adecuada.

En consecuencia, por las razones expuestas no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, la cual será confirmada.

III. CONCLUSIÓN

Todo lo anterior conlleva a señalar que la negación por parte del juez de primera instancia de la prueba por informe, de lo cual se duele el censor, por las razones que se indicaron precedentemente, se ajusta a derecho. En consecuencia, se confirmará el proveído censurado.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha 17 de enero de 2023 proferido por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Oralidad de Medellín 8 de febrero de 2023, dentro del trámite adelantado en el proceso de la referencia.

SEGUNDO: Sin costas, por no aparecer causadas.

TERCERO: En firme, vuelva el expediente digital al Juzgado de origen.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE.


MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022